

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 8° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-31782-2017  
CARATULADO : QUINTANILLA/FISCO DE CHILE

Santiago, treinta y uno de Julio de dos mil diecinueve .-

### VISTOS:

Al folio 1, comparece doña Paz Becerra Urzúa y don Francisco Jara Bustos, abogados, ambos domiciliados en Paseo Estado N° 215, oficina N° 806, Santiago, en representación de don Santiago Licanteo Quintanilla Yáñez, jubilado, del mismo domicilio, quienes deducen, en ésta sede civil, demanda de indemnización de perjuicios en contra de Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Fundando su demanda, a modo de antecedentes generales, señala que es un hecho público que el día 11 de septiembre de 1973 fue derrocado el gobierno constitucional, del presidente Salvador Allende, tomando el poder un régimen de facto que se extendería durante 17 años; éste, se caracterizó por las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, violencia política, jurídica y social, con cientos de miles de personas como víctimas.

Refiere que, bajo pretexto de una situación de guerra interna, se vulneraron los derechos más fundamentales de la persona humana, recogidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales vigentes, la Constitución y las leyes, lo que se efectuó a través de un plan de violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas de los derechos humanos; esta política represiva, prosigue, tenía por objetivo preciso el exterminar a grupos nacionales segregados en razón de sus creencias políticas.

Luego, relata que, algunas de las prácticas implementadas por los organismos de seguridad del Estado sólo pueden ser calificadas de ilícitas, e incluyen, entre otras, asesinatos, secuestros de personas, desapariciones forzadas y aplicación de tormentos, en el caso de la región del Libertador Bernardo O'Higgins se incluyen ejecuciones, torturas, secuestros, detenciones en campos de concentración, relegaciones, persecución y exilio.

Afirma que, en virtud de los hechos consignados por los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión



Rettig, y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada Comisión Valech I, se evidencia, por parte del Estado de Chile, a partir del 11 de septiembre de 1973, la implementación de una política de persecución y de violación sistemática de los derechos fundamentales.

Narra que, a partir de la misma época, un sin número de personas, adscritas o simpatizantes, de ciertos partidos políticos, o que participaban en determinadas actividades, fueron detenidos y se les imputó hechos delictuales ficticios, como la organización de asaltos a cuarteles, el rapto de hijos de militares, la pertenencia a grupos paramilitares, acopio de armas, entre otros, sin prueba alguna sólo fundados en sus vínculos con la izquierda.

Las violaciones a los derechos humanos practicadas por los órganos del Estado, continúa, incluían, entre otras, detenciones ilegales y secuestros, tortura, violaciones y maltratos sexuales, desaparición de prisioneros, ejecución de opositores, asesinatos destinados a la intimidación pública, terrorismo de Estado contra opositores en el extranjero, trabajo forzado y otros tratos crueles, detenciones masivas, represión indiscriminada y uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes civiles.

Refiriéndose a las violaciones a los derechos humanos, expone que éstas ocurrieron de forma sistemática y masiva desde el día en que se instauró la dictadura militar; en específico, prosigue, la tortura era frecuente en las detenciones e interrogatorios, cuya ejecución correspondía a agentes de los servicios de inteligencia de las distintas ramas del ejército, de Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.

Relata que los testimonios disponibles concuerdan en que los servicios de seguridad, en especial la CNI, practicaron detenciones, amedrentamientos, amenazas y seguimientos, pese a que algunas detenciones no fueron reconocidas, la mayor parte de los declarantes afirma que la CNI registraba y reconoció sus detenciones, apelando, como justificación oficial de ellas, a la legalidad e institucionalidad de dicho organismo.

En relación a los hechos que motivan su demanda señala que a la época del gobierno de la Unidad Popular se desempeñaba como Jefe de Sueldos, en la empresa Manufacturas de Cobre y que un problema en su rodilla izquierda, anquilosada, le impedía desarrollar trabajo pesado.

Que durante esa época era conocida su militancia de izquierda, lo que no fue un problema hasta el golpe de Estado, indicando que continuó trabajando en la empresa pero en condiciones distintas y con mucho temor debido a la represión generalizada, hasta que el día 2 de noviembre de 1973 fuerzas militares ingresaron a la empresa, siendo detenido y dirigido mediante culeta y amenazas a un camión del ejército, ordenándole un soldado que se



pusiera boca abajo, situación imposible debido a su problema en la rodilla, siendo trasladado hasta las caballerizas del regimiento Tacna.

Señala que al día siguiente fue despojado de su documentación y conducido con la vista vendada a la sala de interrogatorios, siendo víctima de golpes en espalda, estómago, cuello y rodillas, haciéndolo declarar, y expuesto a otros métodos de tortura, como simulacros de fusilamiento y aplicación de corriente.

Relata que posteriormente fue llevado a una prisión conocida como “La Patilla”, durante 2 semanas, recibiendo todo tipo de maltrato físico y psíquico, luego de eso al Estadio Chile por un periodo de 10 días, para finalmente ser conducido a la penitenciaría, siendo liberado el día 18 o 19 de mayo de 1975, debiendo firmar semanalmente en la Fiscalía Militar por poco más de un año.

Indica que estos hechos implicaron para él , perder su trabajo, sin derecho a indemnización, así como tener que dedicarse a trabajos esporádicos para mantener a su grupo familiar, debido a su situación de posible “extremista”, afectando su vida, siendo reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, así individualizado en la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas”, en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040 de 2003 del Ministerio del Interior, cuyo registro como víctima es el N° 19.741, con secuelas por las torturas e ilícitos, sufriendo de estrés post-traumático, y una depresión de larga data.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que configurando los hechos descritos graves violaciones a los derechos humanos consistentes en crímenes de lesa humanidad, se han vulnerado todos los instrumentos internacionales que consagren el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente los artículos 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; todo el contenido de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, a Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, los principios de Nuremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y las normas de ius cogens relativas a crímenes internacionales, efectuando en exhaustivo análisis de las instituciones de derecho internacional en relación a la reparación de las víctimas y la responsabilidad del Estado, para finalmente sostener que el demandante fue



víctima de crímenes de lesa humanidad de acuerdo a una lata exposición del concepto y que las acciones para perseguir esta reparación son de carácter imprescriptible.

En mérito de lo expuesto y previa cita de las disposiciones legales pertinentes, solicita tener por interpuesta acción civil de Indemnización de Perjuicios por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en contra del Fisco De Chile, y en definitiva, acogerla en todas sus partes, disponiendo: (1) Condenar expresamente al Estado de Chile a pagar a la parte demandante, don Santiago Licanteo Quintanilla Yáñez, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de \$150.000.000, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que esta juez estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos; y (2) que en todo evento se condene expresa y ejemplarmente al demandado a pago de las costas de esta causa.

Al folio 7, doña Ruth Israel López, por el Fisco de Chile contestando la demanda de autos, opuso excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante e identifica las prestaciones en dinero y otros medios de compensación dirigidos a la reparación integral de las víctimas; agrega las reparaciones que, conforme a las leyes nacionales de reparación del Estado de Chile, han obtenido los demandantes, incluyendo beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la entrega de una cantidad de dinero, así como también transferencias directas en dinero.

Repara en la complejidad reparatoria, expresando que en lo que respecta a justicia transicional fueron 3 objetivos a que se abocó entonces el Presidente Patricio Aylwin: (a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse. Añade que orientada al segundo objetivo, la Comisión Verdad y Reconciliación, en su informe final propuso una serie de propuestas de reparación, entre ellas una pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas y algunas prestaciones de salud. El referido informe sirvió de causa y justificación al proyecto que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Observa que durante el proceso de formación de esta ley se tuvo presente en todo momento que su objetivo era reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas, haciendo referencia a



diversas expresiones en tal sentido, promoviéndose, según indica la demandada, la reparación del daño moral de las víctimas.

En este punto, establece 3 tipos de compensaciones: (a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; (b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre las prestaciones estatales específicas, y (c) reparaciones simbólicas. Se limita en primer lugar a desglosar los montos desembolsados por el Estado de Chile, entrega además, un listado con las reparaciones específicas señalando que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años, \$1.480.284 para beneficiarios de 70 años o más y de \$1.549.422, para mayores de 75 años; adiciona que el actor pudo recibir recientemente el aporte único de reparación de la Ley 20.874 por \$1.000.000.

Finalmente entrega un listado de actos simbólicos destinados a la reparación de los daños morales de las víctimas. Concluye señalando que existe identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

Opone, además, excepción de prescripción extintiva, conforme a las reglas del artículo 2332 del código Civil en relación a lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo, ya que conforme al relato del actor, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió desde el día 2 de noviembre de 1973 y hasta el día 18 o 19 de mayo de 1975, y ante el entendido que estas acciones no pudieron ser ejercidas, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de esta demanda, esto es, el día 1 de febrero de 2018, han transcurrido en exceso el plazo de 4 años establecido en el artículo 2332, mencionado, debiendo acogerse la excepción de prescripción y rechazarse la acción indemnizatoria deducida.

En subsidio alega la prescripción ordinaria de 5 años, en relación a lo dispuesto por los artículos 2515 y 2514 del Código Civil, por cuanto señala que la imprescriptibilidad es excepcional, reforzando esta idea cita jurisprudencia que reza, “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”. Indica que es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público en base a lo dispuesto por el artículo 2497 del Código Civil, explicando que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado. Señala además que el fundamento mismo de la prescripción sigue un bien jurídico superior que se pretende alcanzar consistente en la certeza de las relaciones jurídicas. Cita, al efecto, sentencia de unificación de



jurisprudencia de 21 de enero de 2013, de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que establece que el principio general que debe regir en la materia es el de la prescriptibilidad de la acción civil, que los tratados internacionales relacionados con la materia no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; añade que la imprescriptibilidad que alguno de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal; que del mismo fallo se desprende que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción que debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, finalmente, alude a la sentencia para señalar que el plazo debe contarse, no desde la desaparición o detención del demandante, sino desde que el titular de la acción indemnizatoria tuvo conocimiento y conto con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia, solicitando a esta juez rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, alega la naturaleza y el excesivo monto pretendido de \$150.000.000, sosteniendo que en términos generales la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para situarla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Continúa, señalando que el daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante un valor que sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, no pudiendo considerarse, además, la capacidad económica del demandante para fijar o determinar dicho monto, el que resulta de todas formas excesivo.

En subsidio, de las excepciones precedentes de prescripción y reparación integral del daño, alega que la fijación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación y que seguirá percibiendo a título de pensión, como también los beneficios extrapatrimoniales.

Finalmente, sostiene la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada, considerando que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia acoja la demanda y establezca dicha obligación y además, solo una vez, que aquella se encuentre firme y ejecutoriada.

En consideración a lo expuesto solicita tener por contestada demanda civil y en definitiva, conforme a s excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto pretendido.



Al folio 11, la demandante evacuó la réplica de la demandas señalando que en su contestación el Fisco de Chile no controvierte los hechos que sirven de fundamento a la demanda, tampoco su calidad de víctima.

En cuanto a la excepción de reparación integral, manifiesta que pretender que una pensión que bordea los \$130.000, es la reparación que mandata el derecho internacional carece de cualquier asidero, cuya insuficiencia puede establecerse comparándola con el ingreso mínimo que existe en Chile, por lo que desde un punto de vista jurídico, no cabe acoger la excepción alegada, no existiendo incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de una pensión austera y simbólica, igual para todas las víctimas reconocidas y demandar por daños en sede civil por el daño concretamente sufrido. En este sentido, asimismo cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

En relación a la excepción de prescripción extintiva de la acción, solicita el rechazo de las peticiones en atención a que el estatuto legal aplicable al caso concreto, es sobre la base de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por nuestro país en los términos del artículo 5° inciso 2° de la carta fundamental y de las normas vigentes, y no puede ser simplemente aquel aplicable a los negocios y relaciones jurídicas entre particulares.

Agrega que la más reciente jurisprudencia del máximo Tribunal de la República, en concordancia con el derecho internacional sobre los derechos humanos, ha variado, reconociendo el carácter de imprescriptible a las acciones civiles o reparatorias que derivan de los crímenes de lesa humanidad, concediendo así la correspondiente indemnización.

En cuanto al monto pretendido señala que la normativa aplicable le exige presentar peticiones concretas, no obstante en la parte petitoria de la demanda, solicita en subsidio que se condene a la suma que esta juez estime ajustada a derecho, justicia y equidad, conforme al mérito de autos.

Finalmente se refiere a la improcedencia del pago de reajustes e intereses alegada por el demandado, manifiesta que la reajustabilidad está ligada a la garantía de reparación integral y del pago efectivo de las obligaciones; en cuanto a los intereses cita doctrina para señalar su procedencia desde el momento en que es fijada la indemnización.

Al folio 13, el demandado evacuó el trámite de dúplica, reiterando las alegaciones, excepciones y defensas de la contestación de la demanda.

A folio 20, se recibió la causa a prueba en autos.



A folio 43, se citó a las partes para oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que en esta sede civil compareció don Santiago Licanteo Quintanilla Yáñez, deduciendo demanda de indemnización de perjuicios en contra de Fisco de Chile, por la comisión de crímenes de lesa humanidad, solicitando que se condene al Estado de Chile a pagarle a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de \$150.000.000, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que esta juez estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos; y que, en todo evento, se condene expresa y ejemplarmente al demandado a pago de las costas de esta causa.

Basa su demanda en los hechos ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** Que doña Ruth Israel López, abogada procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contesta demanda sobre indemnización de perjuicios, solicitando su total rechazo, alegando la excepción de reparación integral del daño fundado en que el demandante ha sido indemnizado, recibiendo una pensión anual y en forma reciente el Aporte Único de Reparación de la Ley 20.874 por \$1.000.000, como gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) y beneficios educacionales y de vivienda; y también reparaciones simbólicas.

Asimismo opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones civiles, todo ello de acuerdo a las normas y jurisprudencia que cita y que ya fueron señaladas en la parte expositiva de este fallo.

En subsidio de lo expuesto, sostiene que la cifra reclamada, como daño moral, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas adoptadas por el Estado de Chile; agregando que resulta improcedente el pago de los reajustes, los que sólo proceden desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada.

**TERCERO:** Que en sus escritos de réplica y dúplica, las partes reiteran las alegaciones, excepciones y defensas de la demanda y contestación respectivamente.





**CUARTO:** Que para acreditar sus afirmaciones, la demandante rindió prueba testimonial y documental, no objetada de contrario consiste en:

**Prueba Documental:**

1. En el anexo de folio 1, copia simple de la página del informe de la “Nómina de personas reconocidas como víctimas”, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Informe Valech I), en la que aparece el actor signado con el N°19.741.

En el anexo del folio 27:

2. Copia simple de certificado de fecha 30 de noviembre de 2018, suscrito por Marcela Cerda González, Jefa (s) de Unidad de Colaboración y Atención a la Ciudadanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que expresa que don Santiago Licanteo Quintanilla Yáñez, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados por la conocida como Comisión Valech I.
3. Copia de Informe Psicológico correspondiente al demandante don Santiago Licanteo Quintanilla Yáñez, de 81 años de edad, expedido por la profesional psicóloga de Prais Maritza Riffo González, con fecha diciembre de 2017, consistente en evaluación mediante entrevista psicológica, donde se concluye, primeramente, la existencia de un trastorno por estrés agudo, asociado al importante deterioro biográfico experimentado por la situación de dramatización extrema vivida, posterior al cual se presentó un trastorno por estrés post traumático, con sintomatología concordante a este evento y frente a lo cual ha tratado de adaptarse en ámbitos laborales y familiares, mostrando un funcionamiento adecuado.
4. Ficha de ingreso del actor a la llamada “Comisión Valech I”, en la que constan los antecedentes de cada una de las detenciones sufridas por el actor, tales como fecha, lugar y lesiones.
5. Copia de cédula de identidad del demandante.
6. Copia de Carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando se informe si existen cargos contra las personas que se encuentran detenidas en virtud de las disposiciones aplicables en Estado de Sitio, para que en caso de ser efectivo se les someta a proceso o en caso contrario se les deje en libertad.



7. Copia de solicitud de certificación que indica, de contenido ilegible
8. Certificación de que se instruyó la causa Rol 300-76, por infracción a la Ley N°17.798, en contra de Santiago Quintanilla Yáñez y otros, donde consta que estuvo detenido desde el 8 de noviembre de 1973 al 19 de mayo de 1975, concediéndosele libertad bajo fianza y que con fecha 4 de mayo de 1976, el Fiscal Militar en su dictamen N° 76, solicitó dictar auto de sobreseimiento temporal y total, siendo aprobado por resolución de fecha 10 de mayo de 1976 por el Comandante en Jefe de la II División del Ejército.

**Prueba testimonial:**

Al folio 34, consta la prueba testimonial ofrecida por la demandante y rendida por don Juan Reinberg Bustamante y don Marcos Enrique Medina Sánchez, quienes legalmente juramentados y sin tacha, exponen al tenor de la minuta de preguntas acompañadas al folio 24, de 27 de enero de 2019, lo siguiente:

Al punto 1, esto es, desde cuándo y cómo conoce al demandante don Santiago Licanteo Quintanilla Yáñez. Ambos testigos señalan que lo conocen hace más de 60 años, desde cuando trabajaban en Madeco y agregan que vivían en la misma Población Madeco.

Al punto 2, esto es, si sabe y cómo le consta la forma en que el demandante don Santiago Licanteo Quintanilla Yáñez se ha visto afectado y ha sufrido daño moral por los crímenes y la tortura de que fuera víctima, y si pudiera describir ese daño en la afirmativa. Ambos testigos afirman que el actor fue detenido el día 2 de noviembre de 1973 por soldados del regimiento Tacna, siendo torturado y trasladado a diferentes centros de detención hasta obtener su libertad a mediados del año 1975. Aseguran que producto de la detención ilegal, perdió su fuente de trabajo como contador y no volvió a conseguir trabajo por la estigmatización causada, además de daño psicológico producido por las torturas.

Repreguntados, agregan que no fueron informados del motivo de detención, intuyendo el primer testigo que se trataba de una búsqueda de armas.

Respecto a los daños, ambos refieren traumas y daños de orden psicológico. En cuanto a daños físicos, el primer testigo señala que la lesión de su rodilla se incrementó, mientras que el segundo refiere daño auditivo.



**QUINTO:** Que, para una idónea exposición del asunto controvertido y habiéndose opuesto por la demandada diversas excepciones, se analizará cada una de ellas separadamente, empezando por la prescripción.

## **I.- EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:**

**SEXTO:** Que, para ello, resulta indispensable señalar que la prescripción extintiva constituye un principio general de Derecho, que adquiere presencia plasmándose positivamente en todos los espectros de los distintos ordenamientos jurídicos, resultando excluida, sólo en aquellos casos en que por ley o atendida la naturaleza de la materia se establece la imprescriptibilidad de las acciones.

Ahora bien, de no considerarse así, la regla general es que no existiría la seguridad jurídica y por tanto, determinados actos se mantendrían indefinidamente en el tiempo en una suerte de incertidumbre que sólo generaría una inestabilidad indefinida en las relaciones jurídicas de todo tipo y no permitiría dar por limitado el ejercicio de la acción indemnizatoria, lo que resulta contrario a toda lógica y hermenéutica jurídica, incluido este tipo de reparación.

**SÉPTIMO:** Que, para efectos de corroborar la tesis señalada precedentemente, se encuentra lo dispuesto por el artículo 2497 del Código Civil, el cual señala que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado; adicionalmente, existen innumerables preceptos de este Código que hacen mención al Estado en el orden patrimonial, y sólo por hacer referencia algunos de ellos, se encuentran los artículos 547 inciso segundo, 983, 995, 1250, 1579, 2472 N° 9, 2481 N° 1, 2497 y 2591, no siendo ninguna de estas normas, objeto de cuestionamientos doctrinarios ni jurisprudenciales.

**OCTAVO:** Que en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional, cabe hacer presente que si bien existen instrumentos internacionales ratificados por Chile que consagran la imprescriptibilidad de los crímenes e infracciones graves en contra de las personas –por ejemplo, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad- en ellos se consagra únicamente la imprescriptibilidad de la acción penal, mas no de la acción civil que, como se viene razonando, se encuentra regulada en Chile por el Título XXXV del Libro IV del Código Civil.

De esta manera, la Convención de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra –que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí



mismas de las responsabilidades incurridas por ellas, por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referida a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que alude a actos contra las personas o bienes citando al efecto, homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar, de propósito, grandes sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente a tenor de las prescripciones del Convenio.

Del mismo modo, la supuesta vulneración de la Convención Americana, tampoco ocurre, pues no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por la demandante. Además, debe tenerse en consideración que dicho ordenamiento fue promulgado mediante Decreto Supremo N° 873 y publicado en el Diario oficial el 5 de enero de 1991, es decir, después de los hechos que motivan este juicio.

Por lo demás, los artículos citados por la actora sólo consagran un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esta Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna e impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido. En consecuencia, es evidente que ninguno de los preceptos citados impide aplicar el derecho propio de cada país.

**NOVENO:** Que así lo ha establecido además nuestra Excma. Corte Suprema en numerosos fallos, emitiendo, en pleno, un pronunciamiento en el aspecto civil de causas sobre indemnización por violaciones a los derechos humanos, quienes en su voto mayoritario establecieron que la Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional.

A mauor abundamiento, la misma jurisprudencia, sostiene que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal.



En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados.

Con la sola salvedad del plazo desde el cual empieza a correr la prescripción, el que debe contarse desde que la víctima tuvo la certeza del ilícito perpetrado y no desde la fecha de las detenciones, estimándose que este hecho se produjo con la publicación del Informe de la Comisión Presidencial y Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, en el año 2004.

**DÉCIMO:** Que por tanto, al haberse ejercido en el caso sublite una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, lo que por lo demás no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que concluyendo en esta materia, entonces, no existe norma expresa ni en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como tampoco una norma interna que se encuentre comprendida en nuestro ordenamiento jurídico que haga **imprescriptibles** los efectos patrimoniales de los delitos declarados imprescriptibles por nuestro ordenamiento; así, no resulta pertinente aplicar por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, lo cual implicaría apartarse del claro mandato de la Ley y principios fundamentales de la institución de la prescripción, tales como, la certeza jurídica, que resulta transversal a todas las ramas del derecho, constituyendo de esta manera cualquier argumentación contraria sólo una ficción legal, que atenta contra la finalidad indiscutible que tiene este tipo de indemnizaciones, las cuales incuestionablemente son de carácter patrimonial y, por ende, prescriptibles.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, en la especie, la acción intentada en el presente juicio es de claro contenido patrimonial, ya que a través de ella persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, solicitando el demandante la suma de \$150.000.000 o aquella que esta sentenciadora, estime pertinente, por concepto de daño moral.

**DÉCIMO TERCERO:** Que así las cosas, y no existiendo norma alguna que en el ámbito civil se refiere a la imprescriptibilidad de estas acciones, no cabe sino aplicar las normas de derecho interno que rigen las acciones patrimoniales y que establecen la prescripción; la cual, en el caso de



marras es de 4 años, en conformidad a lo previsto por el artículo 2332 del Código Civil.

**DÉCIMO CUARTO:** Que dicho lapso deberá computarse, de acuerdo a lo sostenido por la Excma. Corte Suprema, desde la publicación del Informe de la Comisión Presidencial y Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, en el año 2004; y, habiéndose notificado la presente demanda con fecha 01 de febrero de 2018, se observa que se encuentra vencido largamente el plazo de prescripción de la acción respectiva, haciendo imperativo, por tanto, y resultando este sólo hecho suficiente para acoger la excepción de prescripción extintiva interpuesta por el demandado Fisco de Chile, respecto del demandante.

## **II. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN REPARATORIA INTEGRAL:**

**DÉCIMO QUINTO:** Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente esta sentenciadora hará una referencia a la segunda excepción opuesta por el Fisco conforme indicó la demandada en su contestación, esto es la excepción de reparación integral al demandante por haber sido ya indemnizado, para lo cual identifica las prestaciones en dinero y otros medios de compensación destinados a reparar a las víctimas, tales como reparaciones directas en dinero, haciendo presente que al año 2015, el Estado había desembolsado la suma de \$706.387.596.727, pensiones, bonos, asignación de derechos y gratuidad en prestaciones médicas a través del programa de reparación y atención integral de salud, beneficios educacionales, continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores entre otros, como también reparaciones simbólicas, tales como memoriales, museos y otros; exponiendo que la reparación tiene un carácter sumamente complejo, reiterando que existen mecanismos de compensación propios de nuestro derecho interno y otros emanados de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, la actora indicó en síntesis y en lo que resulta pertinente al respecto, que las pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos, en ningún caso reparan íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos, no siendo en ningún caso incompatibles, la pensión de sobrevivencia con cualquier indemnización por daño moral, presupuesto que en todo caso no resulta una cuestión pacífica en nuestro ordenamiento jurídico y que debe ser probado.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que así las cosas el Fisco alega que se realizaron distintas prestaciones y por distintos conceptos para reparar el daño



causado, no obstante ello, ninguna prueba rindió en orden a acreditar fehacientemente respecto al Señor Santiago Quintanilla en específico el pago o beneficios que indica en su defensa, correspondiéndole a él el peso de la prueba en esta materia; en conclusión sólo hizo referencia genérica a las demás situaciones similares pero no al caso sublite; por lo que esta excepción, será rechazada.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que en atención a lo ya arribado, las demás alegaciones, como también prueba allegada, tales como personerías, el excesivo monto pretendido y la improcedencia del pago de reajustes e intereses, en nada altera a lo que se lleva razonado,

Y vistos y además de conformidad, a lo dispuesto en los artículos 1567, 1568, 1698, 2332 y 2492 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 160, 170 y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.123 y sus modificaciones, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de personas que señala; Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; Convenios de Ginebra de 1949; Convención Americana de Derechos Humanos; Constitución Política de la República de Chile y demás normas pertinentes, **SE RESUELVE:**

- I. Que se acoge la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile; y en consecuencia, se rechaza en todas sus partes la demanda de indemnización de perjuicios opuesta a folio 1 por el demandante señor Santiago Quintanilla Yáñez.
- II. Que se rechaza la excepción de reparación integral opuesta por la demandada, Fisco de Chile, por las razones expresadas en el motivo décimo séptimo de este fallo.
- III. Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

**Rol: C- 31.782-2017.-**

**Dictada por Doña Sylvia Papa Beletti, Juez Titular.-**



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta y uno de Julio de dos mil diecinueve .-**

